

Los nuevos pobres

La actual dinámica social y económica está dando lugar a un aumento de la pobreza y a un debilitamiento de los lazos sociales, en un contexto global de crecientes desigualdades sociales, donde los más ricos son cada vez más ricos y los más pobres cada vez más pobres. Según la lista Forbes 2011, las personas cuya fortuna supera los mil millones de dólares han aumentado de manera espectacular durante los dos últimos años de crisis, mientras su fortuna conjunta se ha duplicado prácticamente, hasta llegar a los cuatro billones y medio de dólares.

Por lo tanto, la pobreza actual forma parte de una deriva desigualitaria bien precisa. El umbral de la pobreza se sitúa en los países europeos en el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo de las personas, y la exclusión social se encuentra referida a todos aquellos que se encuentran fuera de las oportunidades vitales que definen una ciudadanía social plena.

En un contexto de crisis económica como el actual, se está dando un doble "círculo vicioso" de la pobreza y de la exclusión social, derivado de los efectos de la propia crisis y, a su vez, de los propios recortes sociales. En los países nórdicos y centroeuropeos los índices de pobreza son bastante menores (en torno al 11% - 14%) debido a que las transferencias en recursos sociales a las familias son muy superiores a los que existen en otros países como España.

En los últimos años la pobreza y la exclusión social están aumentando en los países occidentales, a consecuencia de la crisis económica, que ha dado lugar a un crecimiento del paro y, en general, a un incremento de las situaciones de precariedad y vulnerabilidad social. En España, si en 2008 el 19,5% de la población se situaba por debajo del umbral de la pobreza —una de las cotas más altas de Europa—, en 2009 este porcentaje se elevó al 20,7% y en 2010 ascendió al 21,8%. Los ingresos medios anuales de los hogares españoles se vieron reducidos en 2010 en un 4,4% respecto al año anterior. Resulta significativo que el 35,9% de los hogares españoles declaren no tener en estos momentos capacidad para asumir gastos imprevistos y que tres de cada diez manifiestan llegar a fin de mes con dificultad o con mucha dificultad.

Son las familias numerosas (41,8%), seguidas por las integradas por una persona de 65 años o más (41%) y las monoparentales (36,7%), en las que se dan mayores tasas de pobreza. Se constatan, por lo tanto, tendencias de mayor incidencia de la pobreza entre los ancianos, los niños y los jóvenes.

Junto a la caracterización más tradicional de la pobreza, en los últimos años estamos asistiendo al surgimiento de los llamados nuevos pobres: personas que han pasado de estar razonablemente integradas, o en situación de vulnerabilidad moderada, a deslizarse de lleno hacia la pobreza y la exclusión social. Según un reciente informe de Cáritas, diez millones de personas viven actualmente en España bajo el umbral de la pobreza y ocho millones se encuentran en situación de exclusión social (medida a partir de la exclusión del empleo, del consumo, de la política, de la educación, de la vivienda, de la salud, y del aislamiento social en sus vidas).



El desempleo, y más en particular el paro de larga duración, junto al endeudamiento en la adquisición de viviendas y los recortes de gastos sociales, explican en gran medida el crecimiento de la pobreza y la exclusión social. Según los datos de la última Encuesta de Población Activa, el número de hogares con todos sus miembros en paro asciende a 1.425.200. Además 500.000 personas han agotado todas las ayudas y se han visto forzadas a recurrir a las prestaciones de organizaciones del tercer sector, debido a la insuficiente capacidad de respuesta de los servicios sociales públicos. Necesida-

des básicas vitales como las de alimentación también se están resintiendo, tal como muestran los datos de una encuesta reciente realizada por Intermon Oxfam que concluía que más de dos millones de personas padecen situaciones de necesidad alimentaria en España.

Los perfiles sociológicos de estos nuevos pobres se corresponden con trabajadores con escasos salarios, varones parados con baja cualificación, fundamentalmente trabajadores de la construcción y la hostelería que perdieron sus empleos; jóvenes parados en busca de su primer puesto laboral (hay un 46,1% de paro juvenil); autónomos sin protección social; desempleados mayores de 45 años; familias inmigrantes sin trabajo y en situación precaria; familias monoparentales con bajos ingresos, generalmente integradas por una madre con hijos a su cargo; jóvenes (con y sin hijos), que han tenido que retornar al domicilio de sus padres, ya jubilados, y de cuya pensión viven todos. En ocasiones se trata de personas y de familias de clase media, que están sufriendo procesos de movilidad social descendente, que nunca pensaron que se verían obligados a acudir a los servicios sociales asistenciales.

La combinación de los efectos del paro de larga duración con el recorte de las prestaciones sociales puede conducir a un agravamiento progresivo e intolerable de las situaciones de pobreza y exclusión social.

Como rasgos básicos de estas nuevas situaciones se apuntan tendencias de "familización", "feminización", "extranjerización" y "geriatriización" de la pobreza y la exclusión social, con un deterioro acusado de las condiciones de vida de los niños (el 24,1% se encuentra en situación de pobreza, frente a una media europea del 20,1%). Ello se debe fundamentalmente a que en España con las transferencias sociales actualmente sólo se consigue reducir la pobreza infantil en un 43,9%, a diferencia de lo que sucede con la media de la UE-27 (71,3%) o lo que acontece en países como Francia, Suecia, Austria, Finlandia, Hungría e Irlanda que consiguen reducir la pobreza inicial (antes de las transferencias públicas a las familias) en unos porcentajes que rondan el 90%. Lo cual significa que la reducción de los gastos sociales va a disparar los índices de pobreza a corto plazo.

Por otro lado, se constata una apreciable transmisión intergeneracional de los riesgos de pobreza y una

pérdida de derechos de ciudadanía para un número cada vez mayor de personas, que acaban formando parte del mundo de las personas "sin hogar" (en torno a treinta mil).

Ante esta grave situación es preciso fortalecer el Estado del Bienestar y las garantías ciudadanas de bienestar social; a través de leyes orgánicas e incluso de una mayor precisión constitucional, fomentando leyes de armonización que garanticen que ninguna Comunidad Autónoma pueda bajar, por debajo de determinados umbrales, el nivel de las prestaciones sociales a su población. También habría que establecer cotas mínimas de gasto social en diversos niveles, como han propuesto ya los sindicatos y, sobre todo, plantear un pacto de Estado para luchar contra la pobreza y la exclusión social. Sea cual fueren las medidas que se adopten, lo prioritario en estos momentos es frenar la deriva a la baja del gasto social. Para ello el "gasto social" no debe ser entendido como un dispendio, sino como una inversión útil de mejora en las condiciones de ciudadanía y de la sociedad en su conjunto.

En España, en los últimos años se han introducido mecanismos sociales, correctores y paliativos, como la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, pero, junto a ello y otros avances en las políticas sociales durante los gobiernos socialistas, no debe olvidarse que las pensiones y salarios mínimos han crecido insuficientemente en términos comparativos con otros países de nuestro entorno. Asimismo, en España el porcentaje de gasto en protección social continúa seis puntos porcentuales del PIB por debajo de la media europea. Lo cual nos sitúa ante un riesgo de dualización social, que debe ser corregido.

Por lo tanto, es prioritario que el problema de la lucha contra la pobreza y la exclusión social se sitúe de manera central en la agenda política. Los sectores políticos progresistas deben impulsar políticas que favorezcan la inserción laboral de los ciudadanos (en trabajos de calidad, estables, etc.), así como las políticas que garanticen recursos económicos mínimos, en combinación con unas adecuadas garantías de rentas y de acceso a servicios públicos de calidad. Asimismo, es necesario promover políticas que tengan en cuenta los efectos producidos por la inmigración y el envejecimiento de la población, especialmente en un momento de crisis económica como el actual. **TEMAS**